

ACTUALIDAD ECONÓMICA



Los inversores internacionales examinarán en la junta a Corredor

Asociaciones de accionistas preguntarán por la gestión de riesgos en el apagón

PAULA MARÍA MADRID

Nunca antes una junta de accionistas de Redeia, la empresa semipública que incluye a Red Eléctrica, había suscitado tanta expectación dentro y fuera de España como la de este año. El apagón del 28 de abril y el cruce de acusaciones que ha desatado han puesto en guardia a asociaciones internacionales de defensa del inversor. Dos de ellas van a intervenir directamente en la junta del próximo lunes para examinar tanto a la presidenta de la compañía, Beatriz Corredor, como el sistema de riesgos del grupo y su independencia frente al Gobierno, su mayor accionista mediante la Sepi.

EL MUNDO ha conversado con dos portavoces de estas entidades. Florian Beckerman, vicepresidente de Better Finance, organización que defiende en la UE los intereses de los usuarios de servicios financieros; y Kristjan Verbic, quien también forma parte de la ejecutiva de este lobby y de la Federación Mundial de Inversores (WFI, por sus siglas en inglés). Ambos son, además, miembros de la ESMA, el regulador bursátil europeo.

Hay precedentes, pero no es habitual que estas asociaciones irrumpieran en las juntas de las sociedades cotizadas. Lo han hecho, ocasionalmente, ante situaciones «inusuales o en casos importantes». Para Beckerman, el de Redeia lo es. «El tema tiene un alcance europeo. Hay muchos inversores de la UE en el mercado español y en sus empresas energéticas. Los accionistas y el mercado internacional necesitan transparencia y comprender realmente qué ha ocurrido. Lo que hemos visto es que mientras el Gobierno español decía algo, la empresa ha dicho cosas diferentes. Eso es contradictorio, y estamos muy interesados en comprender cómo funcionan las estructuras de gestión de riesgos y de gobierno corporativo de la empresa».

Internacionalmente llama la atención que esa versión contradictoria —«complementaria», según Redeia— se dé entre una compañía y su principal inversor, el Estado.

«Es esencial que las empresas cotizadas, especialmente aquellas con una participación estatal significativa, tengan una gobernanza sólida. No sería la primera vez que surge la cuestión de una posible priorización de objetivos políticos sobre los intereses de los accionistas en empresas de propiedad parcialmente estatal,

en España y en otros lugares de la UE», insiste Verbic.

«A veces sucede que los accionistas y sus empresas tienen conflictos de intereses y, en este, nos gustaría entenderlo», completa Beckerman, quien intervendrá en nombre de la asociación europea en la junta del 30 de junio. Pondrá la lupa en tres aspectos de la empresa, «transparencia, gestión de riesgos y gobierno corporativo».

«Si bien los apagones pueden ocurrir, y de hecho han ocurrido en varios países, no recuerdo ningún caso en que tales eventos se produjeran a pesar de que los propios operadores advirtieran con suficiente antelación sobre los riesgos y sugirieran medidas concretas para mitigarlos», enfatiza Verbic. Puntualiza que si esas recomendaciones no se pusieron en marcha, entonces la empresa debería haber reforzado las medidas de control de la red para evitar un *blackout*.

70

Capital. El Estado, con el 20%, es el mayor accionista de Redeia, seguido de Pontegadea (5%). Pero el 70% de acciones se negocian libremente en bolsa.

Better Finance y la WFI han apoyado la petición de Aemec, la asociación española de accionistas minoritarios, que ha exigido la dimisión de Corredor, algo sin precedentes en los 20 años de esa entidad. ¿Es proporcional? «El apagón ha tenido consecuencias significativas en numerosos sectores económicos y en varios países europeos. Dada la magnitud del problema y las acciones de Beatriz Corredor antes y después del incidente, la medida está justificada, también con los principios de transparencia, responsabilidad corporativa y protección del inversor», apoya Verbic.

Verbic habla con dureza de la gestión de la exministra: «Es la principal responsable de una empresa que parece haber ignorado riesgos identificados por su propio personal técnico y auditores, quienes llevan años advirtiendo de que esto podía ocurrir». Beckerman apunta al interés general: «Las lecciones de este caso son muy importantes para el mercado eléctrico europeo y sus inversores. Entenderlo ayudará a definir nuevos estándares de seguridad».

hipotética mejora ante sus accionistas y que ni siquiera ese escenario le garantizaría después una fusión. «Podría seguir operando estos tres años como si Sabadell fuera una filial, como le ocurre por ejemplo en Turquía, pero aun así la opción de subir el precio se ha vuelto un escenario muy complejo. Hace un mes pensaba que tenía margen y que lo haría una vez estuviese abierto el periodo de aceptación, ¿pero ahora se va a arriesgar a pagar una prima adicional sin saber cómo va a funcionar o si va a funcionar en cinco años? Las probabilidades de mejora se han reducido», opina Nuria Álvarez, analista de banca de Renta 4.

Todos estos planteamientos y cifras deben estar desde el martes sobre la mesa de Carlos Torres y el BBVA. Tal y como reconoció ayer Peio Belausteguigoitia, *country manager* de BBVA España y, a la sazón, número tres del banco, la entidad está estudiando «diversas alternativas» sin descartar ninguna de ellas, tampoco la retirada. «Estamos valorando la decisión del Gobierno de imponer una condición adicional a la adquisición del Banco Sabadell. Estamos en ese análisis y en próximas fechas se sabrá algo. Será en breve, no tenemos ningún afán en que se vaya retrasan-

do este proceso», dijo en los Cursos de Verano organizados por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Menéndez Pelayo en Santander.

Los planes de la entidad pasaban por tener listo el folleto en la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) en cuestión de semanas y comenzar el periodo de aceptación en julio con una duración que conclui-

12,71

Euros. Es el precio al que cerraron ayer las acciones de BBVA tras registrar un descenso del 3% en la sesión de cotización del Ibex 35.

ría en septiembre, sin embargo, este calendario ahora también es una incógnita. Entre otras cosas, porque BBVA tiene que rehacer sus cálculos e incluirlos, junto con las condiciones de Moncloa, en el documento que presente a los accionistas si finalmente decide seguir con la OPA.

En un principio, el banco planteó unas sinergias de 850 millones de euros, considerando unos 450 millones por la integración tecnológica de la

operativa, 300 millones por la reducción de empleos y unos 100 por costes de financiación, pero Moncloa le impide hacer despidos o cerrar sucursales por razón de la OPA y no está claro que le permita integrar las plataformas, así que esos cálculos se antojan ahora papel mojado.

Por su parte, Banco Sabadell también hace números y cree que a BBVA no le salen las cuentas. Según dijo también ayer en el mismo foro cántabro el consejero delegado de la entidad, César González-Bueno, la decisión del Gobierno de vetar la fusión ha reducido las probabilidades de que la OPA salga adelante.

El banco ha puesto el foco en el 24 de julio, que es la fecha elegida para presentar su nuevo plan estratégico. Para entonces, ya habrán despejado una de las claves que también rodea a la OPA: la venta de su filial británica TSB. «Sólo se hará si crea valor para los accionistas de Banco Sabadell», afirmó González-Bueno. Por otro lado, en referencia al impacto fiscal que tendría el canje de acciones para sus accionistas, la entidad calcula que el 88% de ellos tendría que pagar más impuestos que lo que recibirían en efectivo por parte de BBVA porque a nivel fiscal contaría como una venta de acciones y una compra posterior.